



JARA & MARÍN ABOGADOS

NO ISAPRE

Procedimiento	: Especial
Materia	: Acción Constitucional de Protección
Recurrente 1	: CORPORACIÓN PRO-DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE VIÑA DEL MAR
RUT	: 65.173.522-k
Representante Legal	: DEBORAH HUGHES GUNTER
RUT	: 15.948.570-6
Ambos con Domicilio	: Calle Doce norte N° 1175, Viña del Mar
Recurrente 2	: FUNDACION YARUR BASCUÑAN
RUT	: 65.087.270-3
Representante Legal	: JORGE YARUR BASCUÑAN
RUT	: 6.606.511-4
Ambos con Domicilio	: Avda. Vitacura 4562. Vitacura. Santiago, Chile.
Abogado Patrocinante y Apoderado	: GABRIEL ALONSO MUÑOZ MUÑOZ
RUT	: 10.404.584-7
Domicilio	: Calle Moneda 920 Oficina 803, Santiago.
Recurrido	: SOCIEDAD URBANIZADORA REÑACA CONCÓN S.A.
RUT	: 94.046.000-K
Representante legal	: JUAN IGNACIO SOZA DONOSO
RUT	: 7.011.344-9
Domicilio	: Paseo Ahumada 11, oficina 803, Santiago

En lo Principal: Deduce Acción de Protección; **En el Primer Otrosí:** Orden de No Innovar. **En el Segundo Otrosí:** Acompaña Documentos; **En el Tercer Otrosí:** Se ofrece material audiovisual que indica, **En el Cuarto Otrosí:** Se oficie; **En el Quinto Otrosí:** Patrocinio y Poder.



JARA & MARÍN ABOGADOS

ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE VALPARAISO

GABRIEL ALONSO MUÑOZ MUÑOZ, Rut 10.404.584-7, abogado, con domicilio en Calle Moneda 920 Oficina 803, comuna de Santiago en representación, según se acreditará en un otrosí, tanto de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, organización que a su vez es representada por su Presidenta doña **Deborah Hughes Gunter**, como de la Fundación Jorge Yarur Bascuñán, representada por su Presidente **Jorge Yarur Bascuñán**, todos ya individualizados en la presuma de este escrito, a US. Itma., con respeto decimos:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, venimos en deducir Recurso de Protección a favor de los recurrentes, con el objeto de que SS. Itma. disponga y adopte de inmediato las providencias necesarias para asegurar a nuestros representados, los demás vecinos del sector y la comunidad de Concón en general, la debida protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República, cuyo ejercicio se encuentra actualmente afectado por la conducta arbitraria y e ilegal de Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A., empresa recurrida ya individualizada en la presuma de esta presentación, consistente en la revegetación de una parte Campo Dunar de Concón, al del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, todo ello, en virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que se exponen a continuación.



JARA & MARÍN ABOGADOS

I.- PROCEDENCIA DEL RECURSO

a) Plazo de interposición

1.- La presente acción constitucional se interpone dentro del plazo de 30 días corridos establecido en el Auto Acordado de Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Fundamentales. En efecto, con fecha 08 de julio de 2021, las recurrentes tomaron conocimiento de la actuación de la recurrida, consistente en la instalación de determinados palos de madera, para posteriormente proceder a cercar una zona del Campo Dunar de Concón. Como se expondrá en lo sucesivo, dicha actuación constituye un acto ilegal y arbitrario susceptible de vulnerar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cuestión que da cuenta de que el presente recurso se interpone dentro de plazo.

b) Garantía susceptible de ser cautelada mediante el recurso de protección

2.- En conformidad a lo señalado por el inciso segundo del artículo 20 de la Constitución de la República, procede la acción de protección *“cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión legal imputable a una autoridad o persona determinada”*. En el particular, la acción ilegal consiste en el cercamiento de una zona del Campo Dunar de Concón para su posterior revegetación, sin haber sometido dicha actividad al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y, por lo tanto, sin contar con ninguna resolución de órganos con competencia ambiental que lo califique.

II.- ANTECEDENTES DE HECHO

3.- El Campo Dunar Punta de Concón es un sistema natural que corresponde a la denominación geomorfológica de “dunas colgadas”. Se encuentra en la costa de Chile Central, al norte de la conurbación Valparaíso-Viña del Mar-Concón,



JARA & MARÍN ABOGADOS

correspondiendo la mayor parte de la superficie actual del mismo a la comuna de Concón. Se emplaza entre las comunas de Concón y de Viña del Mar, particularmente entre el deslinde sur de la Urbanización Costa de Montemar en Concón, la parte norte de la comuna de Viña del Mar y las bermas de la Avenida Concón Reñaca y de la Avenida Borgoño. Por lo mismo, coexisten en esta área dos sectores declarados Santuarios de la Naturaleza: el Campo Dunar correspondiente al sector de Concón y el Campo Dunar emplazado en la parte norte de la comuna de Viña del Mar. Es importante destacar que estos se encuentran separados por una franja de terreno de suelo urbano, y rodeados por dos sectores más en cada comuna.

4.- Mediante Decreto Supremo de fecha 26 de diciembre de 2012, se derogó el Decreto N° 481 de agosto de 1993 y sus modificaciones posteriores, estableciendo como Santuario de la Naturaleza el sitio denominado “Campo Dunar de la Punta de Concón”, fijando su límite por un polígono cuyas coordenadas específicas se detallan en el acto. En dicho decreto, reconociendo explícitamente la existencia de un ecosistema extremadamente frágil en el mismo, se expandió el área protegida del Santuario mismo. De esta forma, el Campo Dunar de Concón cuenta con una extensión de más de 50 hectáreas protegidas tanto por el Decreto Supremo ya aludido y el PRC de la Comuna de Concón del año 2017 que declara área verde más de 20 hectáreas del referido campo. Es importante destacar que dicha protección ha colaborado al medio ambiente, permitiendo que el espacio siga siendo el hábitat natural de decenas de especies animales y vegetales.

5.- Se agrega a lo expuesto, que en virtud del Decreto N° 10, publicado el 9 de junio de 2015 del ministerio del medio ambiente, e declara zona saturada por material particulado fino respirable mp2,5, como concentración anual y latente como concentración diaria, y zona latente por material particulado respirable mp10, como concentración anual, a las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.



JARA & MARÍN ABOGADOS

Siendo esta condición, dado los lamentables eventos de Quintero y Puchuncaví, una cuestión que debe estar presente al momento de presentar toda intervención sea cual sea su grado, particularmente un ante proyecto y/o petición de permiso de construcción en la comuna de CONCON.

Así, es obligación legal y moral tanto de las autoridades municipales, y especialmente de aquellas gubernamentales que regulan nuestra institucionalidad ambiental, particularmente la Superintendencia de Medioambiente, quien tiene la responsabilidad de brindar la debida protección ante una construcción(destrucción), movimiento de tierra, etc. que pudiese afectar el área verde del Plan Regulador Comunal de la Comuna de Concón del año 2017; como también el área aledaña o adyacente al Santuario Dunar de Concón. Así, a nuestro juicio toda construcción, movimiento de tierra etc. Ya sea sobre el área verde o adyacente al campo Dunar de Concón requiere o la declaración de pertinencia respectiva (DIA) y/o un Estudio de Impacto Ambiental (Resolución RCA)

Es del caso que la recurrida al parecer es propietaria de este paño de terreno en la comuna de Concón, una parte que corresponde al área verde (final de la calle Costa de Monte Mar) y otro terreno que se ubica al final de la Avenida Cornisa. Como sea que fuera, ambas construcciones se encuentran próxima al área protegida conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 45 de diciembre de 2012 que se adjunta a esta presentación y que en lo medular señala:

JARA & MARÍN ABOGADOS

Artículo 2°.- Establécese como Santuario de la Naturaleza el sitio denominado "Campo Dunar de la Punta de Concón", fijando su límite por un polígono cuyas coordenadas específicas, dátum WGS84, proyección UTM, huso 19 sur, son las siguientes:

VÉRTICE	COORDENADA ESTE	COORDENADA NORTE	VÉRTICE	COORDENADA ESTE	COORDENADA NORTE	VÉRTICE	COORDENADA ESTE	COORDENADA NORTE
1	261.450,9177	6.352.625,3330	33	261.435,8027	6.352.450,7875	65	261.427,7789	6.352.327,5175
2	261.442,1263	6.352.596,0010	34	261.441,7506	6.352.450,6867	66	261.426,8273	6.352.327,0333
3	261.442,1619	6.352.593,8268	35	261.448,2803	6.352.450,2342	67	261.428,2030	6.352.323,3481
4	261.441,7991	6.352.589,5713	36	261.454,6607	6.352.449,4804	68	261.428,9860	6.352.320,7515
5	261.440,5683	6.352.582,1578	37	261.460,8229	6.352.448,4399	69	261.429,9489	6.352.315,5324
6	261.438,9594	6.352.574,5231	38	261.466,5911	6.352.447,1502	70	261.431,5587	6.352.302,1886
7	261.436,9825	6.352.567,0743	39	261.472,0258	6.352.445,6058	71	261.431,9504	6.352.299,3591
8	261.435,2509	6.352.559,1329	40	261.477,0977	6.352.443,8151	72	261.432,1366	6.352.296,9284
9	261.434,8682	6.352.556,5472	41	261.481,7897	6.352.441,7843	73	261.431,4680	6.352.285,4743
10	261.434,7444	6.352.552,6985	42	261.486,0202	6.352.439,5588	74	261.431,1801	6.352.272,7050
11	261.434,9122	6.352.550,0635	43	261.489,8620	6.352.437,1112	75	261.431,1857	6.352.267,0260
12	261.435,4259	6.352.547,4116	44	261.493,3084	6.352.434,4457	76	261.431,0426	6.352.265,0914
13	261.437,1576	6.352.542,5950	45	261.496,3549	6.352.431,5659	77	261.430,7785	6.352.263,3520
14	261.437,9201	6.352.540,5362	46	261.498,9972	6.352.428,4762	78	261.428,7693	6.352.257,6730
15	261.438,6025	6.352.531,7856	47	261.501,2338	6.352.425,1786	79	261.465,0412	6.352.258,2886
16	261.438,8103	6.352.529,1326	48	261.503,0627	6.352.421,6761	80	261.501,3016	6.352.259,3914
17	261.439,4611	6.352.525,4393	49	261.504,4826	6.352.417,9711	81	261.537,5439	6.352.260,9812
18	261.440,0619	6.352.522,9198	50	261.504,7293	6.352.415,9171	82	261.573,7615	6.352.263,0577
19	261.443,4218	6.352.515,1861	51	261.504,6461	6.352.414,0837	83	261.577,8419	6.352.263,8792
20	261.443,9467	6.352.514,0367	52	261.504,1564	6.352.407,6687	84	261.582,9212	6.352.264,9018
21	261.444,5528	6.352.511,7210	53	261.502,9552	6.352.401,3481	85	261.598,3661	6.352.268,1536
22	261.445,2457	6.352.505,4096	54	261.501,0577	6.352.395,2006	86	261.614,6782	6.352.268,7467
23	261.445,3913	6.352.501,9375	55	261.498,4873	6.352.389,9026	87	261.671,9619	6.352.273,0131
24	261.445,3844	6.352.499,6768	56	261.495,2760	6.352.383,7276	88	261.698,5019	6.352.288,1157
25	261.445,1928	6.352.497,3960	57	261.491,4639	6.352.378,5449	89	261.705,4430	6.352.291,1704
26	261.444,1456	6.352.493,6630	58	261.487,0983	6.352.373,8191	90	261.716,1963	6.352.292,8749
27	261.443,5793	6.352.491,7279	59	261.482,2335	6.352.369,6087	91	261.718,3777	6.352.294,3969
28	261.442,1057	6.352.475,7987	60	261.474,1405	6.352.361,4117	92	261.720,1363	6.352.296,1131
29	261.441,4413	6.352.469,3887	61	261.465,6208	6.352.353,6593	93	261.729,0400	6.352.303,9349
30	261.440,8671	6.352.465,4476	62	261.456,6987	6.352.346,3734	94	261.729,0400	6.352.304,0407
31	261.440,1595	6.352.462,3252	63	261.447,3998	6.352.339,5752	95	261.729,4922	6.352.304,8098
32	261.438,9294	6.352.458,2516	64	261.437,7506	6.352.333,2839	96	261.730,0067	6.352.305,9448

6.- Los instrumentos de planificación territorial vigentes en el Campo Dunar, son la "Reformulación del Plan Regulador Comunal de Viña del Mar del 2002" (actualmente en reformulación) y el "Plan Regulador de Concón del 2017", que determinan que el uso del suelo del área de estudio tiene zonificación V2, H7 y AP (Área Protegida), y en las áreas adyacentes zonificación H7, AP, E2, V1, LM. Así



7



JARA & MARÍN ABOGADOS

acantilado (Castro y Andrade, 1990). También, son consideradas “dunas relictas” que han sido localmente reactivadas por procesos eólicos actuales (*Paskoff et al, Antecedentes Ecológicos, Botánicos y Faunísticos, 2002*). Como fue reconocido por el Decreto Supremo N° 45, se trata de un área que presenta características únicas, alberga un ecosistema extremadamente frágil y forma parte del patrimonio cultural de la región, por lo que para su conservación se requiere de una especial protección.

8.- Con fecha 08 de julio del presente año, la empresa recurrida procedió a la instalación de determinados palos de madera y un cartel en la parte norte del Campo Dunar de Concón, particularmente en la zona calificada como Área Verde, a metros del Santuario de la Naturaleza. Como se puede apreciar en las siguientes imágenes, la instalación de dichos elementos se vincula, al parecer, con la ejecución de una actividad de revegetación, basada en un supuesto programa de cumplimiento elaborado en el marco de un procedimiento sancionatorio seguido ante la Superintendencia del Medio Ambiente, órgano que cuestionablemente procedió a aprobarlo.



JARA & MARÍN ABOGADOS





JARA & MARÍN ABOGADOS





JARA & MARÍN ABOGADOS





9.- Con fecha 10 de julio del presente año, los recurrentes se percataron de que la empresa recurrida sin explicación ni fundamento alguno procedió al cercar el sector supuestamente a revegetar, prohibiendo el paso a cualquier persona no autorizada. Cuestión que es evidentemente arbitraria e ilegal. Las siguientes imágenes, captadas el 10 de Julio de 202,1 dejan constancia de lo anterior.





JARA & MARÍN ABOGADOS





JARA & MARÍN ABOGADOS





JARA & MARÍN ABOGADOS





10.- La elaboración del Programa de Cumplimiento que contempla la medida de revegetación denunciada, fue aprobada en el marco del procedimiento sancionatorio rol D-118 seguido ante la Superintendencia del Medio Ambiente. Este antecedente reviste una importancia gravitacional, toda vez que el referido procedimiento sancionatorio fue cursado con posterioridad a la dictación de la sentencia Rol N° 10.477-2019, en la que la Excelentísima Corte Suprema, acogiendo un recurso de protección interpuesto por mis representados, que declaró ilegal el proyecto de urbanización y loteo ejecutado por la recurrida de autos, cuya ilegal construcción se localiza en la parte norte del Campo Dunar de Concón, a metros del Santuario de la Naturaleza y del área que se pretende revegetar.

11.- En dicha oportunidad, el Supremo Tribunal ordenó a la recurrida a ingresar el



JARA & MARÍN ABOGADOS

proyecto de urbanización y loteo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, mediante la elaboración del procedimiento más estricto procedimiento de nuestra institucionalidad, esto es un Estudio de Impacto Ambiental, toda vez que se trataba de una actividad ejecutada en la cercanía de un Santuario de la Naturaleza y que era evidente la afectación de dicho lugar único de Biodiversidad. Lo más grave es que hasta la fecha, el proyecto mencionado no ha ingresado a dicho sistema de evaluación, encontrándose la empresa inmobiliaria recurrida en franco DESACATO del fallo de la Excma. Corte Suprema que data del 5 de Junio de 2019.

12.- Lo expuesto se puede apreciar en el material audiovisual acompañado en el tercer otrosí de esta presentación, consistente en dos reportajes exhibidos en dos canales de televisión abierta, en los que se da cuenta de la ejecución del proyecto de urbanización y loteo de RECONSA y todas sus irregularidades.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

13.- El Constituyente, entendiendo que el establecimiento de un catálogo de derechos fundamentales sin mecanismos de protección es letra muerta, consagró en el artículo 20 de la Carta Fundamental el recurso de protección al establecer: *“El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24º, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la*

autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá, también, el recurso de protección en el caso del N°8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”.

14.- A partir de la norma transcrita, la jurisprudencia ha señalado que para admitir la procedencia del recurso de protección deben darse copulativamente los siguientes requisitos: a) Existencia de un acto u omisión ilegal; b) Que dicho acto u omisión provenga de una autoridad o un particular; c) Que dicho acto afecte alguno de los derechos tutelados por la norma en alguna de las formas establecidas por la misma (privación, perturbación o amenaza) y; d) Legitimidad activa del recurrente. Si se pretende la tutela del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el acto u omisión debe ser ilegal y debe imputarse a una persona o autoridad determinada.

A) ACTO ILEGAL

15.- La doctrina ha señalado que, en materia de recurso de protección, el concepto de ilegalidad debe entenderse en sentido amplio como sinónimo de antijuridicidad. De esta forma, actúa ilegalmente quien no respeta el ordenamiento jurídico en su conjunto, ya sea vulnerando la Constitución Política de la República, la ley o los reglamentos dictados en conformidad a ella.

16.- En el presente caso, la conducta ilegal consiste en el cercamiento de una parte del Campo Dunar de Concón y en el comienzo de la actividad de revegetación, sin someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, incumpliendo las exigencias de la Ley N° 19.300. Particularmente, las normas infringidas por el actuar de la recurrida son el literal p) del artículo 10 de la Ley N° 19.300 y el artículo 11 literal d) del mismo cuerpo legal.



JARA & MARÍN ABOGADOS

17.- El literal p) del artículo 10 de la Ley N° 19.300 dispone que deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: *“Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas, humedales urbanos o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita”*. Por su parte, el artículo 11 literal d) del mismo cuerpo normativo dispone: *“Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias: d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares y áreas con valor para la observación astronómica con fines de investigación científica, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”*.

18.- Desde hace algún tiempo, la Excelentísima Corte Suprema ha interpretado de forma armónica ambas disposiciones, concluyendo que *“toda obra, programa o actividad próxima a un área protegida susceptible de ser afectada por éste, debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través del instrumento de revisión más intenso contemplado en la legislación vigente, consistente en el Estudio de Impacto Ambiental”* (Rol N° 12.808-2019 y Rol N° 10.477-2019).

19.- Particularmente, el pronunciamiento del Supremo Tribunal en la sentencia Rol N° 10.477-2019, que revocó la sentencia Rol N° 8-2019 dictada por esta Ilustrísima Corte, acogiendo la acción de protección intentada por esta parte en contra de la misma empresa recurrida, presenta las siguientes virtudes:

- a) Determinó que los proyectos que la recurrida pretendía ejecutar en proximidades del Campo Dunar debían someterse a un Estudio de Impacto Ambiental previo, en base a lo dispuesto en el artículo 11 letra d) de la Ley



JARA & MARÍN ABOGADOS

Nº 19.300.

- b) Consagró como criterios de aplicación del artículo 11 letra d) de la Ley Nº 19.300 la magnitud, extensión e impacto del proyecto y la proximidad de este a una zona protegida, poblaciones o sitios prioritarios.
- c) Reconoció el valor ecológico, geológico, patrimonial y social del Campo Dunar de Concón, así como su fragilidad, dada por el carácter único y sus factores de conservación.
- d) Estableció que un proyecto que incluía la urbanización de dos calles y la división de un predio en 4 lotes, desarrollado en proximidades del campo Dunar por el propio RECONSA, debía contar con un Estudio de impacto ambiental favorable.

20.- Ahora bien, la sentencia Rol Nº 10.477-2019, estrechamente vinculada al recurso que por este acto se interpone, determina en su parte resolutive:

“Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de cuatro de abril dos mil diecinueve, y en su lugar se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Gabriel Muñoz Muñoz, abogado, en representación del Movimiento Duna Viva y de la Fundación Jorge Yarur Bascuñán en contra de la Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A., debiendo la recurrida ingresar el proyecto de loteo y urbanización ya singularizado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por encontrarse en la situación contemplada en el artículo 11 letra d) de la Ley Nº 19.300.”

21.- Tomando en consideración el razonamiento vertido por la Excelentísima Corte Suprema en el fallo citado, es evidente que la ejecución de la actividad de revegetación y el cercamiento de la zona en cuestión es ilegal, toda vez que



JARA & MARÍN ABOGADOS

nuevamente la recurrida desconoce lo dispuesto por los artículos 10 letra p) y 11 letra d) de la Ley N° 19.300.

22.- De este modo, el acto denunciado, al encontrarse a metros del Santuario de la Naturaleza y ser susceptible de afectarlo, debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, no sólo porque la Ley N° 19.300 así lo establece, sino también porque la Excelentísima Corte Suprema así lo decretó en una causa en que la recurrida resultó vencida y cuya actuación fue calificada como ilegal.

23.- En conclusión, queda de manifiesto, entonces, que tanto el artículo 10 letra p) y el artículo 11 letra d) de la Ley N° 19.300 exigen el sometimiento de la actividad cuestionada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Si además se considera lo dispuesto por la Excelentísima Corte Suprema en la sentencia Rol N° 10.477-2019, fallo estrechamente vinculado a los hechos denunciado, no cabe sino calificar el acto de la Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A. como **ILEGAL**.

Es dable señalar que el derecho de propiedad no puede ser concebido como un derecho absoluto e inalienable, por lo que es claro que tiene límites que están determinados por su función social, y que en el caso de autos se encuentra comprometida la conservación de un monumento natural y el uso del área para esparcimiento. De tal manera que los recurrentes sostenemos que se encuentra actualmente vulnerado lo dispuesto en el art. 19 N.º 8 de la Constitución Política de la República, al consultarse el derecho de los habitantes de la comuna vivir en un medio ambiente libre de contaminación e imposibilitando que el Estado pueda tutelar la preservación de la naturaleza.

Baste recordar acá que el Santuario, que tiene una extensión de más de 50 hectáreas entre área protegida por el DS 45 y el PRC de la Comuna de Concón del año 2017 que declara área verde más de 20 hectáreas, y que se ha transformado en el hábitat natural de decenas de especies animales y vegetales. Así, en su



JARA & MARÍN ABOGADOS

oportunidad y dado la depredación de los proyectos inmobiliarios en el sector, motivó la dictación del Decreto Supremo N.º 481 del año 1993, que declaró Santuario de la Naturaleza al Campo Dunar en toda su extensión, siendo luego reducido a 12 hectáreas. Y posteriormente a través del Decreto Supremo de 2012 se aumentó a más de 30 hectáreas.

24.- Que así lo ha señalado, nuevamente y con claridad la Excma. Corte Suprema en sentencia de fecha 29 de marzo de 2021, en causa rol 88411-2020, caratulada Corporación Pro-defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y otro con Inmobiliaria Punta Piqueros, que en la parte que interesa señala:

"Noveno: Que el recurso en estudio se funda en la vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República. Si bien el texto constitucional no contiene directrices sobre qué debe entenderse por dicho concepto, él se encuentra definido en el artículo 2°, letra 11) de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, conforme al cual se trata de *"el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige o condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones"*.

Esta definición legal consagra en nuestro ordenamiento jurídico un concepto amplio, que abarca no sólo los componentes naturales sino también toda manifestación sociocultural. Así lo ha resuelto esta Corte con anterioridad, al señalar: *"La Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. La obligación constitucional que se le impone al Estado de proteger el medio ambiente sólo puede entenderse bajo la premisa que a partir de él se desarrolla toda forma de vida"* (CS Rol N°1219-2009).

Así lo ha entendido también la doctrina, al explicar:

"El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación incluiría también el patrimonio cultural como elemento del



JARA & MARÍN ABOGADOS

medio ambiente. Esto es, el patrimonio cultural, lato sensu, integra el ámbito amparado por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Este aspecto material del derecho ha sido reconocido tanto por la jurisprudencia ordinaria como constitucional (...) Si el patrimonio cultural inmaterial ingresa dentro del ámbito de protección del medio ambiente y, por tanto, dentro de la esfera de protección que despliega el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, con mayor razón debería entenderse incorporado el patrimonio cultural material” (Aguilar Cavallo, Gonzalo. Las Deficiencias de la Fórmula “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” en la Constitución Chilena y Algunas Propuestas para su Revisión. Revista Estudios Constitucionales, Santiago, v. 14, n. 2 (año 2016) p. 365-416).

Décimo: Que, en la especie, el sólo hecho de la realización de obras sobre un Santuario de la Naturaleza, sin haber evaluado los impactos que tales trabajos tendrán sobre la flora y fauna del lugar, su conformación geológica y su vegetación marina autóctona, en un sector que, además, se ha erigido como parte importante del patrimonio cultural y ambiental de la Región de Valparaíso, implica una vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en tanto no existe certeza alguna de que su ejecución no afecte la adecuada conservación del sitio protegido, circunstancia que obliga a esta Corte a adoptar medidas tendientes a abordar su actual estado, con miras a evitar la materialización de un daño que, considerando las especiales características del bien afectado, puede llegar a ser irreparable.”

B) ACTO IMPUTABLE A UNA PERSONA O AUTORIDAD DETERMINADA

25.- Según fue explicado anteriormente, la Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón es la persona que se encuentra en ejecución del acto ilegal. Lo anterior fue corroborado por dichos de trabajadores consultados con fecha 08 de julio del presente año y además por lo mencionado en el apartado “Los Hechos”, en el que se acompañan imágenes que explican que la actividad se está ejecutando sobre la base de un programa de cumplimiento cuyo titular es la recurrida.



JARA & MARÍN ABOGADOS

C) AFECTACIÓN DEL DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN

26.- La actividad de revegetación y cercamiento del sector vulneran el ejercicio legítimo del derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República. Su ejecución sin contar con los instrumentos que exige la legislación ambiental da cuenta de una evasión de un sistema que busca resguardar la presente garantía, estableciendo límites al despliegue de determinadas actividades. Al no contar la actividad con un Estudio de Impacto Ambiental, circunstancia que debió verificarse conforme a lo ordenado por la Excelentísima Corte Suprema en sentencia Rol N° 10.477-2019, no es posible determinar de forma clara ni oficial los efectos que podrá traer aparejada su ejecución al Santuario de la Naturaleza.

27.- Con todo, en virtud de lo expuesto anteriormente, queda claro que la actividad en cuestión tendrá un impacto en el Campo Dunar de Concón y en el área declarada como Santuario de la Naturaleza, habida consideración sobre lo complejo e interconectado del ecosistema del Campo Dunar.

28.- Particularmente importantes son las conclusiones del denominado **INFORME TÉCNICO SANTUARIO DE LA NATURALEZA CAMPO DUNAR PUNTA DE CONCÓN**, que fuera presentado ante al Excmá. Corte Suprema en causa rol 138427-2020, Elaborado por: Victoria Caroca Muñoz. Químico. Postítulo en Ingeniería Ambiental y la ex SEREMI de Medioambiente de la Región de Valparaíso: Tania Bertoglio Caballero Magister en Alta Dirección Pública. Diplomada en Gestión de Invasiones Biológicas para la Protección de Biodiversidad. Diplomada en Diseño y Evaluación de Proyectos Ambientales. Bióloga. Y que sus conclusiones señalan:

“-El campo dunar de Concón corresponde a un sistema de dunas con singularidades geológicas y geomorfológicas únicas, siendo uno de los elementos del paisaje litoral que representa mayor atención y relevancia de las zonas costeras de Chile Central.



JARA & MARÍN ABOGADOS

- *El campo dunar de Concón es reconocido como un geosítio por la Sociedad Geológica de Chile (SGCh) siendo un paisaje ilustrativo para la comprensión de los procesos eólicos, representando un gran interés científico para comprender la evolución paleogeográfica del borde costero de Chile Central.*
- *Estos depósitos y acumulaciones eólicas de arena son el resultado de una constante interacción de procesos geomorfológicos y biológicos, ligados específicamente al viento, disponibilidad de arena, topografía y la vegetación.*
- *El sistema dunario de Concón ha sido descrito como un campo de dunas colgantes, relictas o fósiles, que actualmente no reciben aportes de arenas pero que se registran localmente reactivadas, este campo de dunas se sitúa sobre una terraza de abrasión marina asociadas al acantilado costero de rocas del basamento de Chile Central.*
- *Actualmente, los depósitos dunarios de Concón se encuentran reactivadas por procesos de origen natural ligados a los vientos provenientes del SW y de origen antrópico asociados a remoción de material por huellas, senderismo y vehículos motorizados.*
- *La vegetación cumple un rol relevante en la estabilización de este sistema, dado que su presencia y colonización obstaculiza e impide parcialmente el transporte de arenas, lo cual permite la clasificación del sistema en dunas activas, semiestabilizadas y estabilizadas a partir de la abundancia de la cobertura vegetal.*
- *Dentro del SNCDC es posible reconocer una amplia variedad de geoformas eólicas asociadas a la acción del viento, identificándose las siguientes en terreno: dunas transversales, dunas longitudinales, dunas fitogenéticas, barjanes, y cordones de deflación.*
- *Las dunas del sector comprenden una zona de alto peligro a remociones en masa no canalizadas, debido a que su falta de cohesión posibilita la generación de*



JARA & MARÍN ABOGADOS

deslizamientos y flujos de arena y donde la pendiente topográfica no es relevante. Su compresibilidad es mala y ante cargas sufre asentamientos diferenciales, por lo cual carece de propiedades como suelo de fundación, siendo incapaz de sostener edificaciones.

- Respecto de las principales amenazas a los objetos de conservación se identificaron con un alto riesgo la construcción de obras civiles, las cuales promueven la pérdida de hábitat arbustivo y refugios para la especie. Por otro lado, las actividades recreativas también son una amenaza debido a la intrusión y perturbación humana, con potencial destrucción de hábitat tanto para la flora como para la fauna

- En relación al patrimonio geológico las principales amenazas de este objeto de conservación son la construcción de obras civiles, la cual provoca pérdida de vegetación y material sedimentario y la promoción de extracción y destrucción de rocas del borde costero.

- Respecto a la zonificación propuesta para el plan de manejo establecen dos zonas que tienen la finalidad, por un lado, preservar las zonas de mayor relevancia ambiental, y por otro, permitir el acceso al público a un sector del Santuario, en donde pueda seguir realizando las actividades tradicionales de la duna. En base a lo anterior se definen dos zonas una de uso público regulado de baja exclusión de público y una zona de preservación de alta exclusión de público esta última limita al Sur Este con un sector de alto desarrollo inmobiliario que ejerce una gran presión al sistema dunar.

- La presión antropogénica ha incrementado la vulnerabilidad de los ecosistemas costeros frente a perturbaciones naturales. Entre otros, el incremento de la ocupación urbanística del espacio litoral y la protección y regeneración artificial de la costa (por ejemplo, regeneración de playas, paseos marítimos) que resultan en la pérdida de dunas costeras y la alteración de la dinámica sedimentaria litoral.



JARA & MARÍN ABOGADOS

-En general, se puede afirmar que las actividades humanas sobre las dunas costeras han causado un extenso cambio ecológico y morfológico. La destrucción y fragmentación de los sistemas Dunares costeros y de los procesos relacionados con su formación y mantenimiento han conducido a la pérdida de un buen número de hábitats costeros (playas, dunas, humedales) y al incremento del número de especies de organismos amenazados y que sólo pueden ser recuperados, al menos en parte, mediante costosos programas de restauración. “

D) LEGITIMIDAD ACTIVA DE LAS RECURRENTES

29.- Finalmente, cabe destacar que ambas recurrentes se encuentran legitimadas para interponer el presente recurso, siendo irrelevante que se trate de personas jurídicas, atendido a la naturaleza de derecho público colectivo de la garantía cuya tutela se refiere en autos.

30.- Sobre este presupuesto procesal, la Excelentísima Corte Suprema, sosteniendo una interpretación amplia de la legitimación activa, ha reconocido expresamente la legitimación de la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y de la Fundación Yarur-Bascuñán para accionar de protección en virtud de la garantía consagrada en el artículo 19 N° 8 de la Constitución en sentencia Rol N° 12.808-2019 de fecha 5 de Junio de 2019, en los siguientes términos:

“Séptimo: Que la legitimación activa requiere, en principio, que la persona tenga un interés real, concreto, personal, directo y actualmente comprometido en el asunto de que se trata y en la especie las recurrentes han manifestado que les asiste un interés legítimo y directo en la construcción de los dos edificios, toda vez que la obra –que a la fecha alcanza un 20% de ejecución- podría significar un impacto ambiental, consistente en la destrucción y/o deterioro de un Santuario Natural cuya especificidad y características singulares lo convierten en un fenómeno natural único y exclusivo a nivel mundial, por lo que su protección se torna aún más



JARA & MARÍN ABOGADOS

necesaria.

Octavo: Que, siempre en relación con este tópico, esta Corte ha sostenido que “cabe señalar que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un derecho humano con rango constitucional, el que presenta un doble carácter: derecho subjetivo público y derecho colectivo público. El primer aspecto se caracteriza porque su ejercicio corresponde, como lo señala el artículo 19 de la Constitución Política a todas las personas, debiendo ser protegido y amparado por la autoridad a través de los recursos ordinarios y el recurso de protección. Y, en lo que dice relación con el segundo carácter del derecho en análisis, es decir, el derecho colectivo público, él está destinado a proteger y amparar derechos sociales de carácter colectivo, cuyo resguardo interesa a la comunidad toda, tanto en el plano local como en el nivel nacional, a todo el país, ello porque se comprometen las bases de la existencia como sociedad y nación, porque al dañarse o limitarse el medio ambiente y los recursos naturales, se limitan las posibilidades de vida y desarrollo no sólo de las actuales generaciones sino también de las futuras. En este sentido, su resguardo interesa a la colectividad por afectar a una pluralidad de sujetos que se encuentran en una misma situación de hecho, y cuya lesión, pese a ser portadora de un gran daño social, no les causa un daño significativo o apreciable claramente en su esfera individual. Por otra parte, el patrimonio ambiental, la preservación de la naturaleza de que habla la Constitución y que ella asegura y protege, es todo lo que naturalmente nos rodea y que permite el desarrollo de la vida y tanto se refiere a la atmósfera como a la tierra y sus aguas, a la flora y la fauna, todo lo cual conforma la naturaleza con su sistema ecológico de equilibrio entre los organismos y el medio en que viven. Así, son titulares de este recurso, necesariamente, todas las personas naturales o jurídicas que habitan el Estado y que sufran una vulneración del derecho al medio ambiente libre de contaminación que asegura el artículo 19 N° 8 del texto fundamental” (CS Rol N° 2732-1996). En la dogmática, si bien se trata de un asunto controvertido atendida la falta de

definición expresa del Constituyente y del Legislador, no pocos tratadistas defienden la legitimación activa de las personas jurídicas para accionar de protección amparados en la garantía del artículo 19 N° 8 de la Carta Fundamental. Así, el autor Jorge Ossandón Rosales señala que: “Un tercer elemento de justificación más general está en la Ley de Reforma Constitucional N° 19.611, que modificó el art. 1° de la Constitución a la redacción “Las personas nacen libres en dignidad y derechos”. Existe doctrina nacional que respalda la idea de que excluir a las personas jurídicas de esa norma constitucional, vía interpretación implica una discriminación arbitraria. Aunque en ese caso se debe fundamentar de mejor forma el concepto de vivir y el de dignidad con el fin de hacer armónico todo el inciso” (Ossandón Rosales, Jorge, “Garantías fundamentales de las personas jurídicas. ¿Titulares del derecho a vivir en un 46 medio ambiente libre de contaminación?”, en Revista de derecho público / vol. 83, 2° sem. 2015, pág. 137). En el mismo sentido, el profesor Raúl Bertelsen Repetto sostiene: “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación plantea precisamente un problema de titularidad, y no puede por ello extrañar que hayan surgido divergencias en torno a la legitimación activa para accionar cuando lo han invocado como derecho infringido sujetos distintos a las personas naturales. Sin perjuicio que en la gran mayoría de los casos los recurrentes han sido personas naturales, ha habido en efecto, ocasiones en que han accionado otro tipo de personas. Así, se ha interpuesto el recurso en favor de juntas de vecinos, cooperativas, sindicatos, un ente privado-público como Conaf, y áreas silvestres protegidas, lo que ha dado ocasión a los tribunales para precisar las personas a las que corresponde accionar” (Bertelsen Repetto, Raúl, “El recurso de protección y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Examen de quince años de jurisprudencia”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 25 N° 1, (1998), pág. 144). Tan cierto es lo expresado por este último autor que en los autos Roles N° 6563-2013, 6564- 2013, 6565-2013 y 6566-2013 de esta Corte Suprema, sobre recursos de apelación acumulados, se



JARA & MARÍN ABOGADOS

procedió a rechazar el recurso de protección, pero no se cuestionó la legitimación activa de las corporaciones que recurrieron, entre ellas la Fundación Océana, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Independientes, de Pescadores Artesanal, Algueros, Buzos Mariscadores, Afines de la Provincia de Huasco, y el Centro General de Padres y Apoderados del Liceo C9 “Japón”, de la comuna de Huasco, entre otros. Lo propio aconteció en los autos Rol 5888-2019 de este Tribunal, donde se aceptó la comparecencia de la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente, ONG Ecosistemas, Comité Nacional Pro-Defensa de la Fauna y Flora, Greenpeace y la ONG Océanas, entre otras.

Décimo: Que, conforme a lo razonado hasta aquí, en la especie no se divisan razones 47 formales o sustantivas para concluir que las personas jurídicas de derecho privado y sin fines de lucro que comparecen en autos se encuentran impedidas de ejercer la acción constitucional de protección invocando la garantía del artículo 19 N° 8 de la Carta Fundamental, más aún si se considera que uno de los propósitos declarados de la Corporación y Fundación reclamantes es la protección y preservación del medio ambiente y, en particular, del Campo Dunar declarado Santuario de la Naturaleza a través de sucesivos decretos supremos desde 1993 a 2012, todo lo cual guarda armonía con el deber del Estado de garantizar la protección eficaz de este derecho fundamental. Por consiguiente, la alegación no puede sino ser desestimada”.

31.- A mayor abundamiento, la legitimidad activa de ambas recurrentes fue validada por esta Ilustrísima Corte en autos Rol N° 8-2019 y por la Excelentísima Corte Suprema en autos Rol N° 10.477-2019, ambas sentencias vinculadas al proyecto de urbanización y loteo de titularidad de la recurrida.

32.- Por tanto, queda de manifiesto que las recurrentes cuentan con legitimación activa para incoar el presente recurso, considerando la especial protección que brinda el constituyente a esta relevante garantía.



JARA & MARÍN ABOGADOS

En tal virtud, los recurrentes estando dentro del plazo de 30 días corridos (contados desde el 08 de julio de los corrientes), interponen el presente recurso de protección solicitando a US. Ilustrísima:

- a) Que declare vulneratorio de los derechos garantizados en el numeral 8º del artículo 19 de la Constitución Política de la República el actuar arbitrario e ilegal, por parte de la recurrida Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A. ya individualizada, pues actúa y ha actuado de manera arbitraria e ilegal colocando en grave e inminente peligro, y destruyendo tanto la biodiversidad del Santuario Dunar Punta de Concón, como el patrimonio único natural, geológico y socio ambiental de la zona, como asimismo es clara la amenaza real a dicha área protegida.
- b) Que ordene la paralización inmediata de la actividad que en la actualidad se encuentra realizando la recurrida (cerramiento ilegal entre otras), y que se ejecute sin Estudio de Impacto Ambiental alguno para la protección del Santuario y la zona en la que se emplaza, a fin de restablecer con urgencia el imperio del derecho, cesando la conculcación de la garantía constitucional ya señalada.
- c) Todo lo expuesto con expresa condena en costas.

POR TANTO, de acuerdo con lo expuesto, y a lo dispuesto en los artículos 1º, 19 y 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de 27 de junio de 1992, y demás disposiciones legales pertinentes.

ROGAMOS A US. ILTMA.: se sirva tener por interpuesta la Acción Constitucional de Protección de los derechos constitucionales de los recurrentes ya individualizados e invocados, admitirla a tramitación y acogerla, ordenando que la empresa recurrida ya individualizada, representada por su respectivo gerente o quien lo reemplace y/o subrogue, informen en el plazo perentorio que Usía Iltrma. fije; y, en definitiva, ordene que se paralicen de inmediato la ejecución de las obras



JARA & MARÍN ABOGADOS

señaladas, restableciendo el imperio del derecho, brindando protección efectiva y eficaz a las garantías constitucionales de los recurrentes, invocadas en el cuerpo de este recurso, y que están siendo y han sido violentadas por el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, bajo el apercibimiento que US. Itma. estime adecuado, y tomar, además, todas las restantes medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, poniendo término a los efectos del actuar arbitrario e ilegal de los recurridos, con costas.

PRIMER OTROSI: Sírvase S.S. Ilustrísima dictar orden de no innovar a fin de paralizar de inmediato la actividad impugnada y cuestionada por mi parte. La solicitud en cuestión se funda en la actual e inminente vulneración del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, toda vez que se está interviniendo el Campo Dunar de Concón sin existir un Estudio de Impacto Ambiental que avale dicha actividad.

El fundamento de la Orden de No Innovar, como señala nuestra doctrina, no es otro que asegurar el resultado de un recurso. En este caso, dicho aseguramiento viene dado por la protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, garantía constitucional vulnerada por la actividad de revegetación. De este modo, y considerando además que existe un peligro y un perjuicio que está por acaecer pero que es posible evitar mediante una actuación oportuna, la paralización de la actividad de revegetación constituye un primer elemento a ponderar para conceder lo solicitado.

En primer lugar, la exigencia de *periculum in mora*, o peligro en la demora, se encuentra completamente satisfecha en el presente caso, toda vez que los hechos denunciados constituyen una verdadera intervención al Campo Dunar de Concón, sitio de gran riqueza ecológica y cuyas especiales características no sólo son dignas de apreciación internacional, sino cuyo valor para el medio ambiente y para la comunidad ha sido destacado por la Excelentísima Corte Suprema. De este



JARA & MARÍN ABOGADOS

modo, la ejecución de la actividad de revegetación, sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental, podría generar daños irreparables en el sector, cuestión que en conformidad a los principios precautorio y preventivo extraídos de la Ley N° 19.300 y la Constitución Política de la República debe ser evitada.

De no adoptarse la orden de no innovar, el Campo Dunar de Concón y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación quedan al descubierto, pudiendo ser afectados irreparablemente.

En segundo lugar, la exigencia del *fumus boni iuris* o humo de buen derecho, se ve satisfecha particularmente por lo estatuido por la Excelentísima Corte Suprema en sentencia Rol N° 10.477-2019. Como fue expuesto en lo principal del presente escrito, mediante la dictación de dicho fallo, el Supremo Tribunal determinó la ilegalidad del proyecto de urbanización y loteo ejecutado por la Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A., ordenando su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental.

Los hechos denunciados se encuentran en estrecha relación con lo ordenado por el tribunal en aquella oportunidad, toda vez que se refieren a una especie de “reparación” del daño causado con ocasión de la ejecución del proyecto de urbanización y loteo. Por ello, la actividad de revegetación al margen del mentado sistema no sólo supone una vulneración a lo dispuesto por la Ley N° 19.300, sino que explican un verdadero desacato por parte de la recurrida a lo ordenado por la Excelentísima Corta en la sentencia Rol N° 10.477-2019.

Por lo expuesto, en virtud de los principios precautorio y preventivo y el deber estatal contenido en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República, solicito encarecidamente a este Ilustrísimo Tribunal se sirva dictar la orden de no innovar pedida, mandatando a la recurrida a la paralizar la actividad de revegetación denunciada.

SEGUNDO OTROSI: Sírvasse S.S. Ilustrísima tener por acompañados los



JARA & MARÍN ABOGADOS

siguientes documentos, con citación:

- 1.- Mandato Judicial otorgado por la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio, Histórico y Cultural de Viña del Mar, o Corporación Pro-Defensa del Patrimonio, y su Presidenta actuando como representante legal.
- 2.- Mandato Judicial otorgado por la Fundación Yarur Bascuñán y su Presidente Jorge Yarur.
- 3.- Set de fotografías que dan cuenta del daño provocado por la acción arbitraria e ilegal de la Inmobiliaria RECONSA recurrida.
- 4.- **INFORME TÉCNICO SANTUARIO DE LA NATURALEZA CAMPO DUNAR PUNTA DE CONCÓN**, elaborado por: Victoria Caroca Muñoz. Químico. Postítulo en Ingeniería Ambiental y la ex SEREMI de Medioambiente de la Región de Valparaíso: Tania Bertoglio Caballero Magister en Alta Dirección Pública. Diplomada en Gestión de Invasiones Biológicas para la Protección de Biodiversidad. Diplomada en Diseño y Evaluación de Proyectos Ambientales. Bióloga.
- 5.- Informe reflexión sobre las amenazas en las dunas de Concón (incluyendo geosito definido por la sociedad Geológica y Áreas protegidas) preparado por el geólogo: Luis Ribba g.

TERCER OTROSÍ: Que, en atención a lo expuesto en lo principal, solicito a S.S. Ilustrísima tener por acompañado el siguiente material audiovisual:

1. Reportaje exhibido en Mega Noticias Edición Central, el lunes 25 de enero de 2021.
2. Reportaje exhibido en Chilevisión Noticias Central, el miércoles 24 de marzo de 2021.

Hago presente que, debido al gran tamaño del material indicado, los videos se encuentran disponibles en el siguiente enlace de descarga: <https://we.tl/t-IL0ypPBYU5>



JARA & MARÍN ABOGADOS

Sin perjuicio de acompañarlos materialmente en pendrive

CUARTO OTROSÍ: Pedimos a US. Itma. s sirva oficial a las siguientes instituciones Al Servicio de Evaluación Ambiental, a la SEREMI de Medio Ambiente y a la respectiva Superintendencia del Medio Ambiente, Región de Valparaíso, a fin de que informe si la intervención y afectación de la recurrida cuentan o no con Resolución de Impacto Ambiental y/o a lo menos Declaración de Pertinencia, que exige la Ley, y en la negativa, que informe las razones de no habérselos exigido.

QUINTO OTROSÍ: Sírvase SS Itma tener presente que en virtud de mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, actuó por y en representación tanto de Corporación Pro defensa, como de la Fundación Yarur Bascuñán ya individualizados, asumiendo el patrocinio y poder en estos autos, con todas las facultades establecidas en ambos incisos del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, que damos por enteramente transcritas, ambos domiciliados para estos efecto en Calle Moneda 920 Oficina 803, comuna de Santiago. En este mismo acto, solicitamos a US. Itma. se sirva tener presente para cualquier comunicación, nuestros correos electrónicos gmunozmabogado@gmail.com.